

Comentarios

Acuerdos de paz y cultura de paz

Cuando a diez años de distancia se nos pide que evaluemos el camino y la realización de los acuerdos de paz, se nos exige también contrastar el presente con el enorme y positivo dinamismo que llevó a la firma de dichos acuerdos. Una energía que sólo recordaremos, si somos fieles al ejercicio de la memoria, como una profunda eclosión de la cultura de paz, en El Salvador.

Debido, entre otros factores, a la herencia colonial, nuestro país se movió, desde una perspectiva histórica, dentro de una cultura estructuralmente violenta, caracterizada social, económica y legalmente por el predominio del más fuerte. Incluso más allá de las diversas legislaciones que pudieran proteger a la persona, y de los esfuerzos por establecer una democracia sólida, la ley fáctica del más fuerte ha tendido a imponerse sistemáticamente. El descubrimiento de que el iletrado tenía los mismos derechos que el letrado, al menos a la hora de depositar el voto, la mujer que el hombre, el adinerado que el pobre, fue lento y, por lo general, a remolque de las luchas mundiales, en favor del sufragio universal. Pero más allá de algunos elementos formales de la democracia, indispensables para el reconocimiento de la misma, en la actualidad, la ley del más fuerte se mantuvo desde la independencia como el elemento primordial del ejercicio del poder, de la regulación de la convivencia ciudadana y de la práctica cultural cotidiana en las relaciones humanas.

Baste con contemplar, en el campo de la política, la abundancia de golpes de Estado y el buen número de generales que presidieron la república, a lo largo de nuestra historia. Los intentos de resolución del conflicto económico, social y político, a través de actividades militares, que cuajaron en

una guerra de once años, muestran, una vez más, la facilidad con que, desde la cultura dominante, se tendía a solucionar los problemas, a través de la fuerza. El derecho de insurrección de la ciudadanía, garantizado por muchas de nuestras constituciones, no mostraba más que la enorme confianza en que la violencia podía ser camino de solución de divergencias, cuando éstas, en su momento, generaban tanto injusticias como modelos claros de violencia estructural o directa. Y señalaba al mismo tiempo una fuerte desconfianza hacia las instituciones y las normas.

Todavía hoy encontramos rasgos abundantes que nos describen nuestra cultura como autoritaria y violenta. Y ello no sólo porque se aplica un exceso de fuerza a determinadas circunstancias y momentos de las relaciones humanas, sino porque, desde el punto de vista estructural, nos hemos organizado de tal manera que se produce con frecuencia un abuso sistemático e injusto contra los más débiles de la sociedad. Tal vez el tráfico sea una de las realidades que expresan simbólicamente nuestro modo de proceder, en la convivencia social. Sin apenas protección (ni mucho menos derechos) para los peatones, el más fuerte se impone sobre el más débil con independencia de la cultura, de la calidad del instrumento manejado o del cumplimiento o incumplimiento de las leyes de tráfico.

Pero incluso más allá de lo visible y patente, podemos contemplar injusticias sistemáticas, precisamente, en aquellos ámbitos básicos de convivencia social, que se suelen regular, basándose en derechos fundamentales. El sistema educativo impide, al menos de momento, la igualdad de oportu-

nidades de acceso a la cultura de un gran número de jóvenes que viven, sobre todo, en el área rural. Elementos básicos de la seguridad social, como son el servicio adecuado para proteger la salud, o una pensión de vejez, aunque sea exigua, quedan relegados sólo a quienes los pueden pagar de forma anticipada; en números, entre un 20 y un 25 por ciento de la población activa. Cuando antes del terremoto del año pasado se hablaba de un déficit cualitativo de viviendas, que supera las 500 000 unidades, estábamos hablando de un problema de vivienda digna, que afecta a la mitad de la población.

A todo esto habría que añadir un problema grave de seguridad ciudadana, en la que la delincuencia organizada y la violencia social (que no es sino otra forma de delincuencia) se aúnan. La impunidad, la incapacidad para asumir responsabilidades, el convencimiento ciudadano, basado en hechos, de que algunos sectores de nuestra sociedad se mueven pública y tranquilamente al margen de la ley y de la ética, añaden dureza y a veces desesperanza a la situación.

Al llegar a este punto, podemos preguntarnos de nuevo por los acuerdos de paz. Independientemente de que tocaran o no los problemas mencionados, lo cierto es que marcaron en la conciencia ciudadana la convicción de que surgía, por primera vez en El Salvador, una nueva cultura. La que llamamos cultura de paz, que parte siempre de un enorme respeto a la vida y a la igual dignidad de las personas, que trata de limitar la utilización de la fuerza, en la solución de conflictos, reduciéndola al mínimo, que regula la convivencia ciudadana, a través de leyes que se inspiran en el bien común y contemplan solidariamente a los más débiles y, por último, que trata de redistribuir la riqueza, a través de servicios y de la creación de un bienestar básico ciudadano. Por primera vez en la historia de El Salvador se resolvía un problema social, de hecho, el problema que más vidas ha costado en toda nuestra historia, de un modo pacífico, racional, dialogado y con un enorme apoyo de la población. En situaciones anteriores, los problemas se habían resuelto por la fuerza. Con los acuerdos de paz se podía decir que estaba dando inicio la nueva cultura mencionada.

Por eso, cuando ARENA o el FMLN se atienen de una manera exclusiva a la letra escrita, a la hora de evaluar estos diez últimos años, cometen una terrible equivocación. Los acuerdos de paz

son, en el imaginario del pueblo salvadoreño, mucho más que unos compromisos técnicos de crear unas nuevas instituciones o repartir tierras de determinada manera. No quiere decir esto que no se deba evaluar el cumplimiento o incumplimiento de lo acordado, lo cual es evidente. Pero quedarse sólo en la evaluación matemática de lo cumplido o lo incumplido sería de una cortedad históricamente irresponsable y dañina.

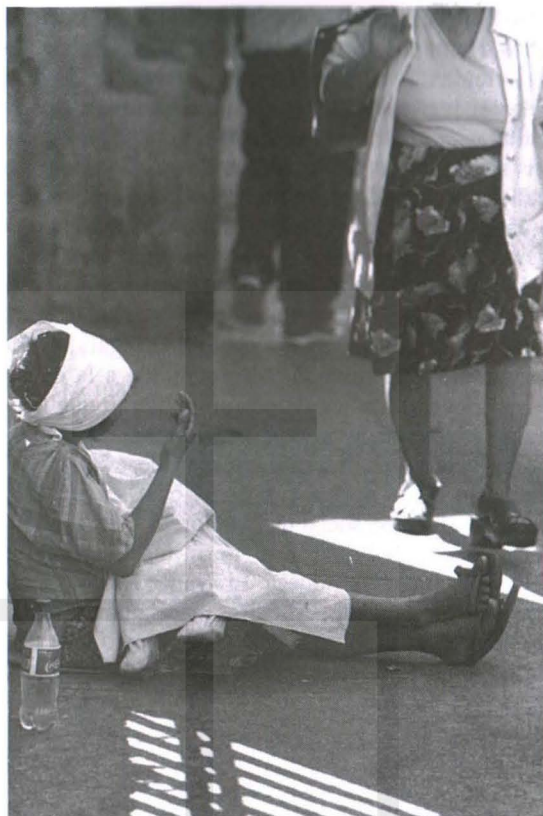
En ese sentido, lo más importante es evaluar no tanto los acuerdos, sino el espacio de diez años que sucedió a los mismos. Y en ese lapso vemos dos elementos básicos. En primer lugar, que se conservan aspectos fundamentales de la cultura de paz, como el respeto a la vida (con limitaciones) o la convicción de que es mejor negociar ante el conflicto que asumir posiciones encontradas y de fuerza. Incluso en algún momento, y aunque lo acompañara el escepticismo de algunos, se revivió parte del espíritu de los acuerdos, al crear una serie de mesas de discusión en torno al plan de nación. La misma población desea cada vez más el buen funcionamiento de las instituciones, y que las mismas sirvan, en realidad, para mediar en los conflictos y regular una pacífica convivencia ciudadana.

Pero al mismo tiempo, debemos afirmar que las esperanzas concebidas en torno a los acuerdos de paz se han quedado muy cortas. Y no sólo a causa de los políticos, que se llevan la porción principal de culpabilidad, sino también de otras estructuras estatales y socioeconómicas. Frente a la cultura de paz, permanece todavía como predominante en El Salvador la que podríamos llamar cultura de la dominación. Esta cultura se caracteriza, entre nosotros, por apostar de manera sistemática por el más fuerte. El varón sobre la hembra, el rico sobre el pobre, el sabio sobre el ignorante, el fuerte sobre el débil. Frente a un deseado estado social de derecho, construido sobre la solidaridad, que sería la aspiración de fondo que impulsó a firmar los acuerdos, se sigue privilegiando lo que algunos han llamado estado de naturaleza, donde la ley del más fuerte predomina sobre las leyes pactadas y establecidas, política e institucionalmente. Quienes fueron con su perseverancia capaces de forzar a los actores del conflicto armado a que firmaran la paz (víctimas muchos de ellos), deseaban no sólo el fin de la guerra, sino la eliminación de sus causas. La primera parte se consiguió. La segunda, ya lo hemos dicho, se ha quedado corta. No sólo a causa de la incapacidad para proponer un proceso

de auténtico desarrollo social sostenido y sostenible, sino incluso porque siguen vigentes los reflejos de obediencia automática a los poderes de facto. Por poner un par de ejemplos ilustrativos de esto último, baste con mencionar los siguientes. A la hora de restringir las horas de venta de las bebidas alcohólicas, nuestros diputados no se sintieron con capacidad para incluir la cerveza entre dichas bebidas hasta que un alto ejecutivo de la cervecera, miembro así mismo de ARENA, les pidió que la incluyeran. En el establecimiento del Fondo Vial (FOVIAL), otra perla de la desigualdad, se liberó del impuesto a TACA, mientras que a los pescadores artesanales se les impuso. Por qué tienen derechos diversos quienes surcan los aires y quienes surcan las aguas, a la hora de contribuir con el mejoramiento de carreteras sigue siendo un misterio para la ciudadanía.

Así las cosas, conviene mencionar los caminos de traición a ese espíritu profundo de los acuerdos de paz, que los partidos y las instituciones han ido recorriendo. En primer lugar, el FMLN salió de los acuerdos de paz con la imagen de una fuerza guerrillera idealista, que había entrado en razón y que había optado por trabajar en la transformación del país, a través de la política. Se esperaba de ella que fuera una fuerza unida, representativa de los intereses de las mayorías empobrecidas, con una concepción moderna del Estado de derecho y sus responsabilidades sociales, y abierta a la nueva cultura de paz y al papel de la sociedad civil en la misma. Frente a ello, nos encontramos con un partido en permanente pugna y división interna, olvidado, en buena parte, de los intereses populares (ni siquiera ha sido capaz de luchar con cierta eficacia por conseguir el pago de un decimotercer mes a los trabajadores), confundiendo el Estado de derecho con los propios intereses políticos, cómplice de algunos de los desastres sociales más importantes de los sucesivos gobiernos, y poco capaz de dialogar con la sociedad civil, si ésta no se pliega a las obsoletas ideas izquierdistas de vanguardia partidaria.

De ARENA se esperaba un conservadurismo cada vez más ilustrado, una apertura modernizante a la ética y a la transparencia política, una gestión eficaz, que desterrara la corrupción de la cosa pública, y un respeto real al Estado de derecho. Frente a ello, nos encontramos con un partido que sólo ha remodelado el lenguaje ante la gradería, pero que no ha tenido capacidad ni siquiera de cambiar



el himno de corte claramente nazi, que lo distinguió desde su fundación. Caracterizado por la gestión de privatizaciones bancarias, el mismo al que llama presidente de la paz se ha convertido para muchos en el símbolo más fuerte de la corrupción de los últimos años. Desde el gobierno, las medidas económicas y sociales han venido inclinando la economía hacia la falta de equidad, y ha contribuido a que aumenten las diferencias entre los sectores de pobreza y quienes tienen más riqueza. El modo de imponer dichas medidas ha sido autoritario y apoyado con frecuencia en manipulaciones oscuras para conseguir votos en la Asamblea Legislativa. La ausencia prolongada durante más de doce años de un programa serio de desarrollo social, y la confianza ciega en que el crecimiento económico, que ni siquiera ha sido el deseado, puede resolver automáticamente los problemas de la población, ha creado una frustración creciente, en una buena parte de ésta.

Una serie de instituciones de la sociedad civil, y algunas estatales, como en sus momentos bue-

nos la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, han alentado la exigencia de seguir teniendo como referencia la cultura de paz. Pero la ineficacia de los gestores políticos de esa cultura ha contribuido a que dominen todavía entre nosotros los estilos culturales del pasado. La cultura autoritaria de la sociedad patrimonial, tan ajena al Estado de derecho, continúa demasiado vigente. La tendencia a cultivar la ley del más fuerte como pauta de comportamiento cotidiano se ha mantenido, salvo en algunos sectores, donde ha habido algunos avances de respeto a la legalidad. La propia empresa privada, acostumbrada a la cercanía al poder, y protegida por un gobierno que tiende a satisfacerla y protegerla, al menos en sus estratos superiores, ha sido incapaz de evolucionar hacia un estilo de trabajo, en el cual se tenga en cuenta la función social de la empresa y los elementos básicos legales, que permitan una mejor redistribución de la riqueza. El avance hacia la desigualdad es evidente. Mientras hace unos años la proporción en el ingreso del 20 por ciento más rico de la población con respecto al 20 por ciento más pobre era de 16 a 1, ya de por sí muy elevado, hoy alcanza el 18 a 1. Cuando la empresa privada habla de conseguir una mayor flexibilidad laboral sólo cabe pensar en el libre despido sin prestaciones, incluidos líderes sindicales y las mujeres embarazadas, pues son todavía éstos algunos de los pocos derechos que les quedan a los trabajadores.

La resistencia a la cultura autoritaria se refleja en las encuestas de confianza ciudadana. Si las iglesias aparecen en los primeros lugares, la razón es muy simple. En ellas se predica sistemáticamente la igual dignidad de todos los seres humanos y se advierte, simultáneamente, que emplean una buena parte de sus recursos y esfuerzos en elevar la condición de las personas, a través de muy diversos proyectos. Si después de las iglesias aparece la Fuerza Armada, es, precisamente, porque acertó a distanciarse del estilo prepotente y violador de los derechos humanos que la caracterizó, en décadas pasadas. A los medios de comunicación se les reconoce su avance, pero se les deja en un cuarto lugar, por la sencilla razón de que la población percibe, en especial en los grandes medios, una posición claramente sesgada hacia los sectores más poderosos del país. Y si los políticos aparecen en último lugar, junto con la Asamblea Legislativa, que es donde se refleja con mayor claridad la actividad de los mismos, es simple y sencillamente porque la población cree que están haciendo muy poco en

favor de unos cambios que no son sólo económicos y sociales, sino, en muchos aspectos, culturales.

Y se censura sobre todo a los políticos, porque son quienes se han atrasado más en este proceso. Firmaron los acuerdos de paz a remolque de la presión interna y externa (aunque sin duda tuvieron su momento, algo tardío, de mayor resolución propia). Quisieron capitalizar políticamente el liderazgo obtenido tras la firma. Y defraudaron a la población, precisamente, por su incapacidad para proseguir en el camino de una transformación cultural de nuestra sociedad, que convirtiera la paz en una relación social de calidad.

Los problemas graves del pasado se han convertido también en una especie de símbolo de la negación de la cultura de paz. Mientras no se resuelvan los viejos problemas, al menos en el campo de un espíritu humanista y cristiano, para no tocar aquí el tema de la justicia, más complejo y conflictivo, será difícil pensar que la paz que vivimos sea signo cualitativo de un cambio de cultura. En diciembre pasado se cumplieron veinte años de la matanza de mil campesinos en El Mozote, en cuenta 131 niños con un promedio de edad de seis años, en el convento de dicho caserío. Es muy significativo que el gobierno, a pesar de los diez años transcurridos, no haya tratado de darles la más mínima reparación moral (un monumento adecuado bajo el lema "Nunca más", una plaza céntrica en la capital, por poner ejemplos de este tipo de reparación). Y es también simbólico que el FMLN, que a lo largo de la guerra utilizó este tipo de masacres para conseguir apoyo político y financiero en el ámbito internacional, no enviara una representación adecuada a la celebración campesina del aniversario. El olvido y la falta de referencia a personajes como Mons. Rivera o los jesuitas de la UCA a la hora de evaluar el proceso de paz, como si la firma de los acuerdos hubiera surgido de la nada, o todavía peor, de los pacíficos corazones de los firmantes, muestra no sólo el bajo nivel de la conmemoración, sino un claro cinismo y un esfuerzo deleznable por aprovechar políticamente lo que debería ser una fiesta de todos, incluidas las víctimas y quienes lucharon para que el derecho de las mismas se convirtiera en fuerza de paz.

En resumen, los acuerdos de paz nos dejan un nuevo punto de partida para el crecimiento de una cultura de paz, gestada a lo largo de la historia de El Salvador con muchas dificultades, y durante la

guerra, con innumerables sacrificios. Que frente a la tendencia histórica de nuestro país hacia la violencia se haya impuesto, en el campo de la política, la ley de Dios que dice no matarás, como recordaba Mons. Romero a los miembros del ejército poco antes de que lo asesinaran, es ya un paso cualitativo frente a la locura del pasado. A los diez años, esta cultura va permeando lentamente el acontecer público. Con respecto a la sociedad civil, especialmente, que ha sido la mejor heredera de esta historia, la cultura de paz permanece todavía en lo que llamaríamos un período de acumulación de fuerzas. Con fuerza insuficiente, pero con capacidad de presión, como lo demostró la lucha contra el intento para destruir la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

La dificultad gruesa para la implantación de esta cultura permanece, en cierto modo, en toda la sociedad. Y se agrava en el campo político, incapaz de enfrentar adecuadamente los vicios de una cultura autoritaria, patrimonial y acostumbrada a la falta de justicia y equidad. E incapaz también, como en buena medida lo han mostrado los deslucidos aniversarios de los diez años, de reconocer dónde estuvo el peso definitivo, en el proceso de paz. No tanto en los firmantes quienes, en realidad, fueron, a lo largo de muchos años, los actores de la guerra, sino en el dolor de tanta víctima inocente y en los esfuerzos de solidaridad que, tanto dentro como fuera del país, se realizaron para poner fin a la guerra. Esfuerzos muchas veces mal entendidos, atacados y no reconocidos de una manera adecuada.

Esta incapacidad cultural de reconocer su valor a las víctimas y a quienes desde las víctimas ini-

ciaron un movimiento y una reflexión que concluyó, al final, en el proceso de paz, se retroalimenta y fortalece con un estilo de organización social que premia y estimula exclusivamente y de hecho al poderoso y al triunfador. La misma estructura económica y social, con fuertes rasgos excluyentes y marginalizadores, potencia y genera ese mismo tipo de cultura del éxito inmediato, que tiende a olvidar valores básicos de convivencia y solidaridad, así como situaciones históricas que impliquen un mínimo de crítica para los triunfadores del momento.

Una mayor coherencia con los derechos humanos, en especial, en el campo de los derechos económicos y sociales, un mejor y más decidido aporte a la educación en todos su niveles, una reforma inclusiva y no excluyente en el sector de los servicios de salud y seguridad social, se muestran indispensables para estimular la cultura de paz. Una política realmente dialogante sobre los problemas nacionales de fondo, y abierta a soluciones concertadas, en torno al bien común, sería el mejor instrumento para fomentar la nueva cultura de paz emergente. Y el reconocimiento de las tragedias, los dolores y los valores del pasado inmediato, si se da, se vuelve una fuente de alimento para la construcción de una sociedad con mayores niveles de comportamiento ético, con más capacidad de decisión para decir nunca más al abuso y al crimen, y con mejor disposición para el desarrollo social, construido desde la solidaridad.

José María Tojeira S.I.
Rector de la Universidad Centroamericana
“José Simeón Cañas”